



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Demandante: MARINA DEL SOCORRO MORA PINO
Demandados: ACP COLPENSIONES y COLFONDOS S.A.
Radicado: 05001 31 05 013 2023 00021 01
Sentencia: S-031

AUTO

En atención a la escritura pública 3368 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad CAL & NAF ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. CLAUDIA LILIANA VELA, T.P. 123.148 del C. S. de la Judicatura. Y se accede a la sustitución de poder presentada por la referida apoderada, a favor del Dr. CESAR AUGUSTO BEDOYA RESTREPO portador de la T.P. N° 270.007 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que la apoderada principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación interpuesto por COLFONDOS S.A.**

y en **grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES**, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de diciembre de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

MARINA DEL SOCORRO MORA PINO demandó a COLPENSIONES y a la COLFONDOS S.A., pretendiendo que se DECLARE la ineficacia, inexistencia o nulidad de su afiliación al RAIS, teniéndola como afiliada a COLPENSIONES.

Como consecuencia, solicita se le ORDENE a COLFONDOS S.A a trasladar los aportes realizados a COLPENSIONES, con su respectiva rentabilidad y el porcentaje de administración debidamente indexados. Y, además, pretende se condene en costas a las demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 23 de septiembre de 1960 y que se afilió al RPM administrado por el extinto ISS, aproximadamente en mayo de 1995; que en el mes de marzo de 1999 se trasladó a COLFONDOS S.A., y que al momento del traslado no le brindaron información suficiente, clara, completa y transparente sobre las consecuencias del traslado, ventajas y desventajas de cada fondo; que no se le explicó la posibilidad del retracto; que en la asesoría solo le explicaron que podría acceder a la prestación a la edad que quisiera, pero omitiendo que el capital era necesario para alcanzar la

pensión; y que si hubiese sido asesorada correctamente, no se hubiese trasladado al RAIS.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES indica que es cierta la fecha de nacimiento de la actora y la afiliación al ISS; frente a los demás hechos, afirma que no le constan por ser circunstancias ajenas a la entidad. Se opone a las pretensiones en razón de que carecen de fundamentación fáctica y legal. Propone como excepciones de mérito carga dinámica de la prueba, inexistencia de la obligación respecto al traslado, prescripción, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, responsabilidad sui generis de las entidades de seguridad social, falta de legitimación en la causa, presunción de legalidad de los actos administrativos, buena fe, imposibilidad condena en costas, compensación, y devolución de cuotas y gastos de administración, seguros previsionales, rendimientos y ahorros voluntarios debidamente indexados.

COLFONDOS S.A. en su contestación manifiesta que no le consta la fecha de nacimiento de la demandante y tampoco la afiliación al ISS; en cuanto a que no se le brindó una completa asesoría, señala que no es cierto lo afirmado, ya que la misma fue suficiente, completa y veraz, sin faltar a la verdad, se informó a la demandante al momento de la afiliación que el valor real de la pensión sería determinado una vez se cumplieran los requisitos para acceder a la pensión y una vez la misma fuera solicitada ante la AFP COLFONDOS S.A, pues la misma se calcula a partir de variables; frente a los demás hechos, indica que se tratan de apreciaciones del apoderado de la parte actora. Se opone a todas y cada una de las pretensiones estimando que la afiliación se dio en virtud a su derecho de escoger libremente el fondo para la administración de sus aportes y que este se dio de acuerdo a los requisitos legales exigidos. Plantea como excepciones de mérito prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, compensación y pago, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe,

ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, y ratificación de la afiliación de la actora al fondo de pensiones obligatorias administrado por COLFONDOS S.A.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2023, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, i) **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad; ii) **CONDENÓ** a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración vigentes a partir del 1º de abril de 1999, con los rendimientos que se hubieren causado, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, los cuales deben ser debidamente indexados; iii) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a recibir las sumas trasladadas y a activar la afiliación de la demandante; iv) y **CONDENÓ** en costas a la AFP COLFONDOS S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLFONDOS S.A. solicitó que sea revocada la sentencia, toda vez que i) las administradoras del RAIS, al momento de la afiliación de la actora, tenían el deber solo de proporcionar un formulario de afiliación de acuerdo al artículo 11 del Decreto 692 de 1994, y solo fue hasta el 2014 con la Ley 1748 y el Decreto del Consumidor Financiero 2071 de 2015, que se configuró el deber de información directo; que para la fecha de afiliación de la demandante, las administradoras acataban lo que se encontraba en la ley, por lo que se entiende que se brindó la información debida por parte del fondo privado; ii) respecto de la indexación, devolución de los gastos de administración y seguros previsionales, considera que esta condena afecta al fondo privado, pues se debe tener en cuenta que los gastos de administración corresponden

a descuentos legales realizados de acuerdo al artículo 20 de la Ley 100 de 1993, e igualmente son utilizados para el ejercicio responsable de las administradoras respecto de los aportes que hacen los afiliados mensualmente; indica que los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993, establecen la forma de financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes, ordenándoles a las administradoras que deben contratar con un tercero asegurador de buena fe a través de un contrato autónomo para el pago de las primas previsionales; *iii)* respecto de la indexación, enuncia algunas sentencias de este Tribunal en donde se expone que los rendimientos financieros ordenados a trasladar compensan la pérdida de valor de la moneda; y *iv)* que no se le debe condenar en costas.

De igual, forma se conoce del asusto vía **grado jurisdiccional de Consulta**, en las condenas adversas a **COLPENSIONES**.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el respectivo traslado, COLFONDOS S.A. manifiesta que no se alegó y menos probó, los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil, para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del acto jurídico del traslado, lo que conduce a que este acto goce de plena validez; que COLFONDOS S.A. siempre le garantizó a la parte demandante la posibilidad de retornar al régimen de prima media, proporcionando la información necesaria; que el actor luego de recibir la información necesaria y suficiente, tenía la capacidad de la libre escogencia de régimen, por lo que esta decisión fue tomada de manera informada. Además, argumenta que COLFONDOS S.A. cumplió con su deber de información al momento de la vinculación, entregando la información requerida. Señala que no es viable la imposición de cargas probatorias inexistentes, ya que para el momento del traslado no existía la obligación de proporcionar información calificada según la jurisprudencia actual; que se debió realizar una

análisis conjunto y crítico de las pruebas; que no está de acuerdo con la ficción legal que hace la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la inexistencia del acto jurídico de traslado pensional; que debe aplicarse las restituciones mutuas; que no se deben ordenar los rendimientos financieros como tampoco los demás conceptos como cuotas de administración ni la devolución de las primas de seguros; y que no es procedente la indexación, ya que los rendimientos generados por la gestión de la afiliada superan la depreciación del poder adquisitivo de la moneda.

COLPENSIONES señala que el traslado efectuado al RAIS, tiene plena validez y la afirmación de vicios del consentimiento del traslado de régimen suscrito, deberá probarse en el desarrollo del proceso judicial con todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de contradicción; que debe tenerse en cuenta lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993; que en caso de declararse la ineficacia deben devolverse todos los conceptos, y que no se le debe condenar en costas, ya que siempre ha obrado de buena fe.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la AFP COLFONDOS S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* la Sra. MARINA DEL SOCORRO MORA PINO nació el 23 de septiembre de 1960; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones desde el 1º de junio de

1995¹; y *iii*) el 1º de febrero de 1999² suscribió formulario de afiliación ante COLFONDOS S.A., entidad en la que se encuentra vinculada actualmente.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993³, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que*

¹ Folio 52 de la contestación de Colpensiones.

² Folios 20 de la demanda y 19 de la contestación de COLFONDO S.A.

³ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 *“ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”*

realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de

múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil,

según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y

- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen, que se trasladó a COLFONDOS S.A. en el año 1999, cuando laboraba en la ESE Hospital San Camilo de Levis; que al momento del traslado solo se le hizo mención de que el ISS era igual que COLFONDOS S.A., pero que este último tendría más garantías que el ISS, manifestándole que podría acceder a la pensión de vejez de una forma más temprana, pero no le explicaron el funcionamiento del RAIS ni los requisitos exigidos en este régimen.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo dicho permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Sin que tampoco sea de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por COLFONDOS S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia

del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

Se advierte igualmente que la orden a COLFONDOS S.A. de trasladar las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación, como fue ordenado en primera instancia, pues

así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas al fondo privado, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Condena en costas

Finalmente, otro tema que cuestiona la apoderada de COLFONDOS S.A. a través de su recurso de apelación, tiene que ver con la condena en costas impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea la recurrente, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso COLFONDOS S.A. presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y ADICIONADA.**

Costas en esta instancia a cargo de COLFONDOS S.A. por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'300.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de diciembre de 2023; y la **ADICIONA** en el sentido de ordenar a **COLFONDOS S.A.**, que todos los conceptos trasladados deben aparecer discriminados con sus respectivos valores,

junto con el detalle pormenorizados de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **688c4232d5e9f64768696b4df7dd1913d228fcce3d3a73298d24ac1d9b04fe43**

Documento generado en 04/03/2024 10:52:07 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>